



# VOTA ✓



ENRIQUE MARQUEZ

centrados  
en la gente

# POR UN PAÍS PARA LA CLASE TRABAJADORA

**Bases programáticas para un Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional, por la paz y la reconstrucción de Venezuela.** | pp. 4-7

**Arrecia la persecución contra dirigentes sindicales** | p. 9

**Falleció el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam** | p. 10

**Gobierno permite a Chevron explotar petróleo hasta 2050** | p. 8

**Margot Benacerraf, rara avis de la cinematografía venezolana** | p. 11

## Editorial

## Unir a las fuerzas auténticamente democráticas para derrotar al autoritarismo

Hay quienes dominan la práctica de «mirar para otro lado» con una maestría asombrosa. Particularmente en estos momentos aciagos en los que el país se debate entre el foso del autoritarismo o abrir paso a una nueva —y no menos difícil— situación en la que, con la lucha organizada y decidida, podamos recuperar los derechos que la cúpula corrupta del Gobierno de Nicolás Maduro le ha arrebatado a las familias trabajadoras.

A estas alturas, para nadie es un secreto que el principal aliado de la ofensiva sin cuartel que mantienen los empresarios y los patronos contra la clase trabajadora venezolana es el propio presidente Maduro. Sin embargo, algunos prefieren fingir con disimulo que no se han dado cuenta de que el Gobierno-PSUV se ha convertido en el más eficaz operador político del gran capital en Venezuela y que su misión es preservar a toda costa las ganancias de la burguesía y, desde luego, sus propios negocios.

A esos que voltean la cara les recordamos —como escribió el poeta guatemalteco Otto René Castillo— que un día «serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo» sobre lo que hicieron «cuando los pobres sufrían, y se quemaba en ellos, gravemente, la ternura y la vida».

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha dado un paso al frente. Los hombres y mujeres de esta organización han decidido unir fuerzas con todos aquellos que vean en la Constitución

una ruta para superar esta etapa terrible.

Unidad de las fuerzas auténticamente democráticas para hacer frente a la deriva reaccionaria. Unidad para confrontar al autócrata cool que baila coreografías para volverse «viral» y graba pódcast con influencers, mientras persigue y encarcela a activistas políticos, sociales y sindicales por todo el país. Para detener al hombre que, entre oraciones y rituales en tarima, reduce impuestos a los empresarios y permite a Chevron saquear al país hasta 2050. Para decirle no al que invoca «baños de sangre» y alzamientos militares si el resultado electoral no le es favorable; al que quiere convencer al mundo de que la destrucción del salario, la pulverización de las prestaciones sociales y el desmontaje de las convenciones colectivas son políticas «socialistas».

Hay que derrotar a Nicolás Maduro y abrir cauce a la reinstitucionalización del país. La permanencia de la cúpula corrupta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el poder es un obstáculo para la restitución de los derechos consagrados en la Constitución; mientras permanezca enquistada allí, luchar será un delito en Venezuela. Y es esta dramática situación la que exige la construcción de una alianza política-electoral más allá de la izquierda.

Pero no se trata de una alianza de cualquier tipo; no estamos hablando de «salir de Maduro como sea». Mucho se ha escrito sobre cómo debería ser una transición en Venezuela.

Para el PCV hay al menos 10 cosas que deben ser asumidas sin dilación por un Gobierno que aspire a reconstruir el país: 1. Revertir la política de destrucción del ingreso; 2. cuantificar y reconocer la deuda del Estado con los trabajadores activos y jubilados; 3. restablecer las convenciones colectivas de trabajo; 4. avanzar hacia un sistema de seguridad social integral, universal, público y solidario; 5. recuperar los servicios públicos básicos; 6. conceder libertad plena a los trabajadores presos por luchar o por realizar denuncias; 7. reenganchar a los trabajadores despedidos de manera ilegal e injustificada; 8. restituir y respetar la autonomía de las organizaciones políticas, sociales y sindicales; 9. derogar el Memorando-Circular 2792 y el nefasto Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y 10. restablecer la legalidad en las organizaciones con fines políticos intervenidas judicialmente.

En estas demandas hemos coincidido con el candidato presidencial Enrique Márquez, con quien firmamos unas bases programáticas para un Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional. Como el país sabe, el emblemático Gallo Rojo está secuestrado por órdenes de Nicolás Maduro. De tal modo que el llamado de la genuina militancia comunista para este 28 de julio es a votar en la tarjeta electoral de Centrados en la Gente.

¡Sí podemos devolverle la dignidad al pueblo trabajador venezolano!

## Un merecido homenaje a Eumelia Hernández

TRIBUNA POPULAR.- El pasado 18 de julio, el El Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES) organizó una nueva edición del seminario permanente *Tradición del pensamiento socialista en Venezuela* con una conferencia dedicada a la dirigente comunista Eumelia Hernández.

La conferencista fue estuvo a cargo de la también dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Adelaida Zerpa, quien relató los aspectos clave de la biografía de Hernández, particularmente su papel precursor en el sindicalismo femenino en Venezuela.

«Eumelia fue una mujer recia y disciplinada, que se oponía al reformismo, al revisionismo y al oportunismo. Por eso siempre decía que 'la revolución no se hace con flores'. La primera vez que la encarcelaron fue durante el gobierno de Eleazar López Contreras, en plena resistencia contra los vestigios del gomecismo», comentó.

Zerpa recordó que «junto prominentes luchadoras sociales» como Josefina Juliac, Lola Morales Lara, Victoria Corao, Mercedes Fermín, Carmen Clemente Travieso y María Teresa Castillo, Eumelia Hernández fundó en 1936 la em-



blemática Agrupación Cultural Femenina.

A partir de entonces fue protagonista de los más importantes esfuerzos de las fuerzas políticas del país por obtener derechos políticos, civiles y sociales para las mujeres. Cuestión que alternó con su labor sindical.

«Eumelia fue responsable del Departamento Femenino Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y la primera mujer en ser electa a un cargo de dirección en una cen-

tral sindical nacional», evocó Zerpa.

Otra faceta abordada por la conferencista fue la labor que desarrolló Hernández entre las mujeres que eran víctimas de trata.

«La sede de la CUTV quedaba por los alrededores del Nuevo Circo de Caracas, donde abundaban muchos centros de prostitución y trata de mujeres. Ella se dedicó a visitar estos sitios y a conversar con estas mujeres; constatando el grado de dominación, explotación y violencia que ejercían los proxenetas, que se asumían como dueños no sólo del trabajo sino de su voluntad», detalló Zerpa.

«La camarada Eumelia fue una firme luchadora, convencida de que la igualdad entre hombres y mujeres sólo podrá lograrse a partir de una revolución social. Una revolución que elimine y destruya las caducas relaciones de producción y dominación capitalista; que derrumbe y sustituya al Estado burgués, por una nueva sociedad donde no exista explotación de ningún tipo; donde sea superada la barbarie, y esto solo será posible en la construcción de un nuevo modelo, la sociedad socialista-comunista», concluyó. ■

# Enrique Márquez: Esta nueva fuerza rescatará la dignidad del pueblo venezolano

TRIBUNA POPULAR.- Desde el Teatro Cantacalero en Caracas, el candidato presidencial Enrique Márquez sostuvo un encuentro con decenas de activistas y dirigentes sindicales para presentar un acuerdo programático que ha sido refrendado por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el movimiento Redes, el Bloque Histórico Popular y el partido Centrados en la Gente.

«Aquí estamos los necios, que nos empeñamos en vivir sin tener precio», dijo Márquez en la emblemática sede del PCV en un evento en el que participaron diversas personalidades del mundo de la política, la academia y el periodismo.

«Llegó la hora de unir nuestras fuerzas políticas, de unir nuestras voluntades para decirle al pueblo venezolano que este movimiento rescatará la dignidad del pueblo venezolano pisoteada por este Gobierno», afirmó Márquez al referirse a esta nueva alianza política de la que participa la legítima militancia del PCV.

El político zuliano explicó que en la base de este movimiento está la recuperación de los derechos consagrados en la Constitución: «Nos comprometemos hasta el tuétano en rescatar y aplicar la Constitución de 1999».

La XVI Conferencia Nacional del PCV decidió a finales de junio respaldar la candidatura de Márquez y ha hecho un llamado público a votar en la tarjeta electoral del partido Centrados en la Gente puesto que la tarjeta del Gallo Rojo está secuestrada por el Gobierno.

## UN COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES

El candidato recordó que en la última década mientras la economía se contrajo en un 80%, el salario de los trabajadores cayó en un 90%. Además contrastó la participación de la remuneración salarial y la renta del capital con respecto al Producto Interno Bruto.

«¿Qué significa esto?», preguntó Márquez: «Que los trabajadores están pagando la tragedia



económica mientras hay otros que se están beneficiando de la misma tragedia. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión».

«Nos comprometemos a sanear la economía para que no sea el trabajador el que siga pagando la factura por la crisis económica venezolana», agregó.

Márquez denunció que en Venezuela «se han suprimido los derechos humanos de los trabajadores» y particularmente se refirió a la organización y la lucha sindical.

«Usted intenta hacer una huelga y va preso. Cuántos trabajadores están presos por defender los derechos de la masa trabajadora. A todos ellos les decimos que de los primeros decretos, de las primeras diligencias que haremos, será sacarlos a 'toditos' de la cárcel, porque no merecen estar allí», aseguró el candidato.

## MADURO HA ENTREGADO LA SOBERANÍA PETROLERA A LOS GRINGOS

Márquez fustigó a la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el robo millonario a la estatal petrolera PDVSA.

Mientras el presidente Maduro aseguraba «que el bloqueo no lo dejaba gobernar» y «que no podía vender petróleo», su ministro Tareck El Aissami, «robó 23.000 millones de dólares».

Márquez descartó la privatización de la industria petrolera y denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro ha entregado «toda la soberanía de nuestra industria petrolera» a los estadounidenses.

«No se trata de desesperadamente producir barriles y dinero como él lo quiere hacer, quién sabe con qué fin. Se trata de hacer una industria sustentable que sea buena para el trabajador y que sea buena para el país», afirmó.

## UNA POLÍTICA CENTRADA EN LOS PROBLEMAS DE LA GENTE

«Queremos construir algo diferente, una nueva centralidad; un nuevo enfoque en el cual el Estado, el Gobierno y la política se centren en la solución de los problemas de la gente» explicó al referirse a su visión de lo que debe ser un Gobierno en esta etapa.

Criticó que Maduro se trate de presentar como un partero de un mejor futuro y lo calificó como «un enterrador de los sueños de los venezolanos».

Márquez advirtió que el Gobierno «quiere hacer creer que a pesar de que está perdiendo, él va a ganar».

«Nos quiere convencer de que no hay opción; que ellos van a ganar como sea. Que tienen la violencia de su lado. Nos quieren convencer de que el pueblo no importa y que el voto no importa. Y nos quieren convencer porque no quieren que votemos», señaló el candidato presidencial y agregó: «Nosotros le vamos a hacer caso; nosotros vamos a luchar». ■

## Figuera: Los comunistas seguirán empujando el reagrupamiento de las fuerzas auténticamente democráticas

TRIBUNA POPULAR.- El sábado 13 de julio se celebró un encuentro del candidato presidencial Enrique Márquez con los trabajadores en el Teatro Cantacalero de Caracas. El objetivo de la actividad fue la presentación de un acuerdo para la recuperación de los derechos de las familias trabajadoras venezolanas.

Cientos de activistas y dirigentes sindicales presenciaron la firma de unas bases programáticas entre el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el movimiento Redes, el Bloque Histórico Popular y el abanderado del partido Centrados en la Gente.

El Secretario General del PCV, Oscar Figuera, dio la bienvenida a los asistentes destacando el papel que Enrique Márquez está cumpliendo en la construcción de «un referente ante los polos hegemónicos» que se disputan el poder político y «son corresponsables de la catástrofe nacional».

A propósito del acuerdo suscrito, el dirigente comunista hizo énfasis en banderas de lucha como el respeto a las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo; la derogación de instrumentos legales anticonstitucionales como la denominada ley «antibloqueo» y la repatriación del dinero fugado por los corruptos.

Figuera, recordó que la tarjeta del histórico Gallo Rojo se encuentra secuestrada, pero que a pesar de ello, «la cúpula del Gobierno-PSUV no ha logrado el objetivo de impedir que las y los comunistas verdaderos sigamos haciendo política y sigamos empujando el reagrupamiento de fuerzas auténticamente democráticas».

## JUAN BARRETO: «SOMOS PARTE DE LA RESERVA MORAL DEL PAÍS»

El Presidente del movimiento Redes, Juan Barreto, celebró el reencuentro de diversos actores políticos, sindicales e intelectuales en el acto celebrado en el emblemático teatro del PCV.

«Aquí estamos los que no nos doblegamos; los que no nos vamos a rendir jamás; los que vamos a dar la pelea hasta la victoria», afirmó Barreto tras saludar a secretarios generales de sindicatos de diversas partes del país, a los periodistas Mary Pili Hernández y Kiko Bautista, así como a los reconocidos profesores Gustavo Márquez Marín y Javier Biarreau.

«Somos parte de la reserva moral de este pueblo; somos parte de la reserva intelectual de este país», agregó.

Por su parte, el Coordinador Político del par-

tido Centrados en la Gente, describió a Enrique Márquez como «una alternativa frente a cualquier desmán, frente a cualquier arbitrariedad que el Gobierno pretenda producir».

«Desde el poder nos empujan a diario para que abandonemos la ruta electoral; nos quieren llevar a la violencia. Centrados en la Gente y su candidato no va a 'pisar ese peine'», aseguró Farías.

«Estamos convencidos de que el voto popular debe ser respetado por las autoridades del país» agregó.

El Coordinador del Bloque Histórico Popular, José Luis Ibrahim Esté recordó que el Consejo Nacional Electoral excluyó sistemáticamente a las organizaciones de izquierda para poder contar con una candidatura propia.

El dirigente situó en este contexto la decisión de «unirnos en la contingencia para ejercer nuestro derecho a la participación».

«Celebramos entonces este acuerdo, no sin antes advertir que no es un cheque en blanco y que este compromiso coyuntural que hoy se firma ante el país entero como testigo, servirá de recordatorio y orientador del próximo ejercicio de gobierno que confiamos en lograr con nuestra decisiva participación», advirtió. ■

# Bases programáticas para un Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional, por la paz y la reconstrucción de Venezuela



Comprometidos con las trabajadoras y los trabajadores venezolanos, las organizaciones políticas Centrados en la Gente, Partido Comunista de Venezuela (PCV Dignidad), Redes, Bloque Histórico Popular y el candidato presidencial Enrique Márquez, suscriben las siguientes bases programáticas para un «Gobierno de emergencia y unidad nacional, por la paz y la reconstrucción de Venezuela».

Se trata de una propuesta programática en construcción, que ponemos a consideración de todas las fuerzas sociales y políticas que se han planteado un cambio, para el debate democrático, y avanzar en la formulación de un programa de consenso que sea punto de encuentro y acuerdo nacional.

## UN COMPROMISO POR LA PAZ Y LA RECONSTRUCCIÓN: UN PROGRAMA PARA VENEZUELA

En la actual encrucijada que vive nuestro país, emerge un clamor no exento de esperanza: la necesidad de un cambio profundo y estructural que resucite al país de entre las cenizas del desgobierno y la desesperanza. Esta es la motivación que subyace en esta propuesta, cuya ambición es nada menos que refundar la nación sobre bases sólidas de institucionalidad, prosperidad económica, bienestar social, descentralización y participación popular.

Nos encontramos frente a una iniciativa que no sólo propone un acuerdo nacional, sino que demanda un amplio compromiso en torno a un proyecto común, una visión compartida de futuro que trascienda las barreras ideológicas y partidistas. Es un llamado a reconstruir desde los cimientos un sistema democrático, donde el centro de gravedad sea el interés supremo de la nación y el bienestar del ciudadano, dejando atrás los intereses personales y los antagonismos estériles que sólo han sumido a Venezuela en el caos y la miseria.

El voto se erige como el arma más poderosa en este proceso de redención democrática. Es

la herramienta que empodera al ciudadano, que le devuelve la voz y el poder de decisión sobre su destino colectivo. No es sólo un acto cívico, sino un acto de resistencia y esperanza; una afirmación de la voluntad popular frente a la manipulación y la opresión.

Sin embargo, la senda hacia la recuperación no es un camino fácil. Se enfrenta a una realidad desoladora, donde las instituciones han sido menoscabadas, la economía devastada, la sociedad fracturada y la familia trabajadora condenada a la miseria. El Gobierno, lejos de ser un facilitador del bienestar común, se ha convertido en un obstáculo insalvable para el progreso y la justicia social.

En este escenario, las propuestas concretas delineadas son el faro que guía hacia una nueva aurora. Desde reformas constitucionales hasta medidas económicas urgentes, cada punto busca restaurar la confianza perdida; recuperar la participación protagónica de los trabajadores; abrir las compuertas a la inversión y reconstruir el tejido social desgarrado por años de desidia y corrupción. De lo que se trata es de restaurar la República.

Es imperativo, más que nunca, sin abandonar el aprendizaje histórico, mirar hacia adelante con determinación y coraje. No se trata sólo de cambiar el rumbo del país, sino de asegurar que ese cambio sea duradero y significativo. Es una apuesta por la paz, la prosperidad y la justicia, por una Venezuela donde cada voz cuenta y cada vida importa.

La tarea es monumental, pero la voluntad es inquebrantable. En el esfuerzo colectivo por forjar un futuro mejor, cada venezolano y venezolana tiene un papel crucial que desempeñar. Es hora de dejar atrás las divisiones y los resentimientos, de unirnos en pos de un sueño compartido de libertad y dignidad.

En última instancia, este acuerdo no es sólo un conjunto de medidas. Es la encarnación de una esperanza renovada, el compromiso firme de una nación decidida a escribir su

propio destino. Es el mapa de ruta, un llamado a la acción que resonará en los corazones y las mentes de todos aquellos que anhelan un presente y un mañana mejor para Venezuela.

Los venezolanos no requieren más promesas efímeras ni retórica vacía. Exigen acciones decididas que reflejen un auténtico compromiso con los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Este compromiso no puede ser una mera aspiración; debe traducirse en un plan de acción concreto y tangible, capaz de restablecer la confianza perdida y reconstruir las instituciones que han sido erosionadas por años de crisis y mal gobierno.

## «Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional, por la paz y la reconstrucción de Venezuela»

Por ello, presentamos y nos comprometemos con este acuerdo en la conformación de un «Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional, por la paz y la reconstrucción de Venezuela». Este no es sólo un acuerdo retórico, sino un compromiso genuino hacia la reconstrucción democrática y la recuperación económica.

Nuestro programa se fundamenta en el retorno a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, como piedra angular para la reconstrucción nacional, guiado por tres pilares esenciales: la plena soberanía, la reinstitucionalización del Estado y la garantía de derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna conforme al Estado Social de Justicia y de Derecho.

Proponemos un proceso de encuentro y entendimiento nacional para corregir los factores de perturbación que amenazan nuestro sistema democrático; erradicar la corrupción en todos los niveles del Gobierno y permitir un proceso de establecimiento de la verdad, justicia y reparación de todas las violaciones cometidas contra los derechos humanos de los venezolanos.

En materia de representación política, impulsaremos la transformación legal necesaria para garantizar la adecuada representación de las minorías en los órganos parlamentarios, acorde con la Constitución, eliminando la perniciosa sobrerrepresentación de las mayorías parlamentarias.

Igualmente, nos comprometemos a promover iniciativas políticas, legislativas y jurídicas, dirigidas a restablecer la legalidad en las organizaciones con fines políticos —intervinidas administrativa y/o judicialmente— para imponer juntas ad hoc, que desplazaron a sus legítimas direcciones nacionales.

La experiencia en el ejercicio del poder ejecutivo en Venezuela, nos ha enseñado lo nefasto que significa para el país y la propia administración del Estado y el Gobierno, la permanencia indefinida en el ejercicio del mismo. Por tal razón, someteremos a consulta pública, vía referendo consultivo, la eliminación de la posibilidad de reelección indefinida a la Presidencia, gobernaciones y alcaldías.

Así mismo, promoveremos la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que —en violación de preceptos constitucionales— establece las inhabilitaciones políticas sin previo juicio, a través de la Contraloría General de la República.

Promoveremos un entorno social, político y económico propicio para generar riqueza y superar la pobreza, garantizando el derecho a la propiedad privada y demás formas de propiedad consagradas en la Constitución; además de las libertades económicas fundamentales. Implementaremos políticas para combatir la pobreza, priorizando la educación y el trabajo como motores de desarrollo, bienestar y ciudadanía.

Desarrollaremos políticas económicas responsables que corrijan los desequilibrios macroeconómicos, para resolver problemas como la hiperinflación, la devaluación, la fuga de capitales, manejo de la deuda, el desempleo y la escasez, fomentando un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento sostenible con igualdad social.

Asumiremos un plan estratégico orientado al establecimiento de un modelo económico productivo que se proponga superar paulatinamente la dependencia y el rentismo, sobre la base de la industrialización a gran escala con participación de la clase trabajadora. En este sentido, aplicaremos un plan integral de recuperación de las empresas del Estado, bajo un modelo de gestión múltiple.

Implementaremos una política monetaria soberana y restauraremos la autonomía del Banco Central de Venezuela, garantizando la transparencia y manejo público de la información sobre la economía nacional, eliminando la opacidad y el secretismo que han caracterizado a este Gobierno.

Nos comprometemos a revisar la política tributaria y ajustarla para reformular aquellos instrumentos, como el IVA, que afectan el crecimiento económico, la generación de empleo y la economía de los más vulnerables.

Garantizaremos la propiedad estatal de PDVSA y demás empresas de valor estratégico para el Estado, para así restituir nuestra soberanía sobre el negocio petrolero y



Foto: Rafael Ortiz

minero; apalancando un verdadero plan nacional de desarrollo productivo.

Nos comprometemos a desarrollar una audaz política de recuperación del parque industrial nacional, hoy devastado por las pésimas políticas económicas del Gobierno. En este sentido convocaremos a los trabajadores y al sector privado, para que, junto al Estado, formulemos e impulsemos un plan de desarrollo nacional.

Promoveremos la inversión nacional y extranjera en el sector energético y minero, con medidas ambientalmente responsables que garanticen la sostenibilidad, preservando los intereses de la República y el desarrollo soberano.



Auditaremos y reestructuraremos la deuda pública externa para alcanzar la solvencia internacional del Estado venezolano y acceder a dinero fresco y financiamiento externo, garantizando los intereses soberanos de la República.

Ejecutaremos un plan jurídico y político para la recuperación de los activos de la República en el exterior y para la repatria-

ción de los capitales que —producto de la corrupción— han sido fugados al exterior.

Nuestro Gobierno será abierto e inclusivo y tomará en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Los conflictos naturales presentes en la sociedad venezolana serán procesados a través del diálogo procurando el acuerdo de todas las partes.

Convocaremos a la creación institucional de una Comisión Tripartita Permanente en la que, en términos de igualdad, el Estado, los trabajadores y los empresarios construyan el escenario para marchar hacia la reconstrucción nacional.

Garantizaremos los derechos sociales y a la organización sindical de los trabajadores; promoveremos la contratación colectiva para asegurar condiciones laborales justas; restituiremos su representación laboral en las empresas estatales y su participación en la formulación e implementación de las políticas públicas.

Asimismo, restableceremos plenamente la libertad sindical. En consecuencia, se procederá a: permitir el registro de organizaciones sindicales sin interferencia del Gobierno ni de la patronal; respetar la realización de elecciones sindicales de acuerdo a los estatutos de las organizaciones sindicales; prohibir toda práctica administrativa y gerencial que obstaculice el libre funcionamiento de las organizaciones sindicales.

Para garantizar la seguridad social de los trabajadores y sus familias, crearemos un Fondo Soberano alimentado por las regalías petroleras y los ingresos especiales extraordinarios que aporte la República, administrado por una instancia tripartita y sujeto a una ley especial aprobada en referéndum popular.

Derogaremos normas e instructivos lesivos a los intereses de los trabajadores, abiertamente violatorios de la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), como el Instructivo ONAPRE y el Memorandum-Circular 2792, restituyendo los derechos violentados en aplicación de ambos instrumentos ilegales.

Desbonificaremos el salario y marcharemos hacia la implantación de un salario digno, respetando su integridad. Al iniciar nuestro Gobierno, estableceremos el salario mínimo y las pensiones en bolívares con una base equivalente a 200 dólares, el cual progresivamente se irá incrementando para cumplir con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución y así cubrir el costo de la canasta básica y demás necesidades de la familia trabajadora. Crearemos un programa alimentario especial para el acceso a productos de calidad para los trabajadores y sus familias.

Los jubilados y pensionados y en fin, todos nuestros abuelos y abuelas y demás personas de la tercera edad, recibirán atención especial de las políticas sociales del Estado. Las pensiones y jubilaciones serán iguales al salario mínimo. Se establecerá una tarjeta especial para la adquisición de medicamentos y se crearán centros de atención médica integral para dar salud y calidad de vida a una población que merece todo nuestro respeto y consideración. Masificaremos las casas de los abuelos y abuelas; serán centros sociales en donde conseguirán afecto, inclusión e incorporación a tareas vinculadas a sus capacidades, conocimientos y experiencias. Nunca serán apartados, pues sabemos que su aporte es muy valioso para toda la sociedad.

Recuperaremos progresivamente las prestaciones sociales y promoveremos la seguridad social como prioridad nacional.

Para proteger la salud y la vida de la clase trabajadora en los centros de trabajo; restableceremos el papel del Estado en lo que respecta a la aplicación y cumplimiento de la *Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo* (Lopcyamat).

El Estado reconocerá la deuda con los trabajadores del sector público y establecerá mecanismos efectivos para honrar tal compromiso.

Concederemos libertad plena a todos los trabajadores presos por defender sus derechos o hacer denuncias; dejando sin efecto los procesos judiciales abiertos contra tales trabajadores y restituyendo sus derechos laborales, civiles y políticos.

La superación de los problemas de la pobreza extrema en la que vive la mayoría de los venezolanos es una de las tareas fundamentales del gran acuerdo nacional; para ello fortaleceremos los programas sociales y los diversificaremos para atender a los sectores verdaderamente vulnerables; los despartidizaremos y eliminaremos su utilización para fines políticos. El Estado compartirá su responsabilidad con las comunidades organizadas, las distintas iglesias, Organizaciones no Gubernamentales y la sociedad civil, para democratizar y ampliar el alcance y penetración de estos programas.

Coordinaremos con los diversos organismos internacionales la atención urgente e inmediata de la crisis humanitaria que padecen nuestros sectores sociales más vulnerables. No se suspenderá ningún programa de apoyo social, sin su análisis previo y sustitución por otro de mayor alcance y beneficio.

La democracia participativa y protagónica auténtica debe ser recuperada. Esto pasa por fortalecer las estructuras sociales de base, brindándoles autonomía, despartidizándolas, democratizando su vida interna y permitiendo su acceso a la toma de decisio-



Foto: Rafael Ortiz

nes del Estado en las diferentes instancias.

La organización social y comunal, la controlaría social, la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, los presupuestos participativos y, en fin, todos aquellas instancias y mecanismos que promuevan la participación y el protagonismo del pueblo, serán reconocidos y estimulados por nuestro Gobierno.

Promoveremos una cultura de respeto a los derechos fundamentales, garantizando el respeto al debido proceso, la protección de la libertad de expresión, la prensa libre, el acceso oportuno a la información y el derecho a la protesta pacífica.

En consecuencia, procederemos a revisar y proponer a la Asamblea Nacional la derogatoria de todos los instrumentos legales que violan las garantías y derechos constitucionales, entre los que se cuentan las denominadas ley «contra el odio», ley «antibloqueo» y la ley de «zonas económicas especiales».



Este acuerdo representa un compromiso con la reconstrucción democrática, el bienestar social y el desarrollo económico de Venezuela, basado en el respeto a los derechos humanos, la justicia social y el fortaleci-

miento del Estado de Derecho y de Justicia.

En el contexto internacional actual, donde la interdependencia global es innegable, debemos reconocer que ningún país puede enfrentar sus desafíos solo. En la cooperación internacional encontramos una vía hacia la estabilidad y el progreso. América Latina, nuestra «Casa Común», tiene el potencial de ser un faro de esperanza, si abrazamos la colaboración y trabajamos juntos en pos de soluciones compartidas.

Será fundamental para reintegrar a Venezuela en la comunidad internacional y levantar las lesivas sanciones que han afectado a nuestra economía, fortalecer la integración regional y buscar alianzas estratégicas para enfrentar desafíos comunes como la defensa de la soberanía, el cambio climático, la migración y la seguridad. Nuestra política internacional será soberana y de paz, abierta a la realidad multipolar de estos tiempos, privilegiando los intereses nacionales, sin subordinarse a ningún bloque internacional de poder, promoviendo el acuerdo, el entendimiento, la cooperación, el desarrollo mutuo y la amistad con todos los países del mundo.

Priorizaremos la educación, el trabajo, la salud y el bienestar social como pilares fundamentales del desarrollo humano, asegurando el acceso equitativo a servicios básicos para todos los ciudadanos.

En el ámbito social, fortaleceremos la familia mediante programas de retorno y reencuentro familiar favoreciendo la recuperación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del país. Será prioridad inmediata detener el flujo migratorio de nuestros compatriotas a través de políticas de generación de empleo y calidad de vida.

Adecuaremos nuestro servicio exterior para brindar protección y acompañamiento a todos nuestros compatriotas que se encuentran mas allá de nuestras fronteras. Nuestro servicio diplomático facilitará y garantizará la relación permanente, envío de remesas, intercambio de información y toda la conectividad que sea necesaria para mantener unida a la familia venezolana, independientemente de lo lejos que se encuentren nuestros seres queridos.



Foto: Rafael Ortiz

Desde el primer día de gobierno tomaremos todas las medidas requeridas para resolver de manera definitiva la profunda crisis del sector eléctrico venezolano. Nos comprometemos a estabilizar el sistema eléctrico nacional en el lapso de un año.

Nos aseguraremos que el agua potable y gas doméstico sean para todos, fortaleciendo las diversas modalidades de participación y control social comunitario.

Rescataremos el sistema de salud pública, modernizándolo, haciéndolo eficiente para que pueda atender las necesidades de nuestro pueblo, y dignificando las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores de la salud.

Enfrentaremos la crisis de nuestro sistema educativo con total urgencia y decisión. Implementaremos un plan de formación para los miles de maestros y profesores que necesitan nuestras escuelas, liceos y universidades. Convocaremos a toda la sociedad para la recuperación integral de todo el ámbito educativo nacional. Nos comprometemos con los docentes y demás trabajadores de la educación, en el mejoramiento sustancial de su salario y la dignificación de sus condiciones de vida. Avanzaremos en la modernización integral de la educación para garantizar su carácter humanista, universal e integral. Asimismo, estimularemos la creación de escuelas técnicas que tomen en cuenta la vocación de desarrollo de cada una de nuestras regiones.

Venezuela debe volver al federalismo para que se cumpla la Constitución. Restituiremos los recursos que constitucionalmente le pertenecen a cada estado y municipio de nuestro país y devolveremos las competencias legales y administrativas que han sido sustraídas por el estado central. Crearemos zonas y polos de desarrollo entre el estado central y los gobiernos regionales, para que cada región pueda desarrollarse a partir de sus propias potencialidades, en correspondencia con el plan de desarrollo

nacional.

El Estado garantizará la plena seguridad alimentaria. Por ello, priorizaremos la atención y el apoyo al sector campesino. Desarrollaremos un programa integral de atención a la producción agrícola, facilitando líneas de crédito e impulsando la recuperación del sector. Los pequeños y medianos productores agrícolas recibirán protección y estímulo especial en nuestro gobierno. El Estado garantizará la seguridad de los productores y su producción para que puedan llevar a cabo su labor dirigida a la seguridad alimentaria de la nación.

Nos comprometemos a desarrollar políticas públicas orientadas a la atención integral y la protección de las personas con discapacidad, generando oportunidades de estudio y empleo adaptadas a sus necesidades, que permitan su desarrollo personal y profesional.

Reconocemos que la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país afecta de forma diferenciada a las mujeres, sus derechos fundamentales y su desarrollo integral; por ello, nos comprometemos a transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, programas, proyectos y medidas de nuestro Gobierno; garantizando los derechos humanos de todas las mujeres con una visión interseccional, colocando como prioridad brindar oportunidades y herramientas para su autonomía económica y financiera.

Los pueblos indígenas siguen sufriendo de una profunda exclusión y negación de sus derechos.

Proponemos la creación de un Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas con autonomía, cuyos integrantes sean electos directamente por las comunidades y pueblos originarios, para que sean parte directa de la solución de sus problemas.

La pequeña y mediana industria, las cooperativas y los emprendimientos familiares recibirán un importante impulso de nuestro Gobierno. Créditos, asesorías,

acompañamiento, mercados y un sistema tributario especial decidido en común acuerdo, formarán parte de las definiciones de políticas inherentes al sector.

El cuidado y resguardo de la naturaleza y el ambiente será una línea maestra que cruce toda nuestra gestión de Gobierno. Sólo un desarrollo sustentable es sostenible y puede garantizar el porvenir.

Este acuerdo no sólo aspira a mitigar la crisis inmediata que aqueja a nuestro país, sino además a sentar las bases para un futuro próspero y justo. Es un llamado y una convocatoria a todos los sectores de la sociedad venezolana, sin distinción política ni ideológica, a unirse en un esfuerzo común por el bienestar colectivo, la restauración de la democracia y la reconstrucción del país.

Hoy estamos asumiendo un compromiso con la gente, en particular con la familia trabajadora, que tiene entre sus expresiones la construcción de este bloque de fuerzas sociales y políticas, que

orienta su acción en este compromiso programático que estamos suscribiendo. Una alianza que no es puramente electoral y coyuntural, sino que se proyecta hacia el futuro, abriendo caminos al porvenir.

Esta alianza social y política contempla también la necesaria unidad y debate para enfrentar los desafíos de los escenarios en desarrollo y por venir, así como los futuros eventos electorales. Una alianza que nos permita avanzar en la constitución de nuevos equilibrios y correlaciones de fuerzas favorables a la democratización del país.

El desafío es monumental, pero la historia nos enseña que en los momentos más difíciles y complejos es cuando los pueblos encuentran la fuerza para renacer. Con valentía y determinación, podemos abrir un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, donde la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la participación sean los pilares sobre los cuales edifiquemos un futuro de esperanza para todas y todos.

# Nicolás Maduro se ha convertido en el capataz de Chevron en Venezuela

TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) calificó la política petrolera del Gobierno de Nicolás Maduro como «lesiva a la soberanía nacional».

Recientemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) promovió en la Asamblea Nacional la renovación a una concesión por 15 años más a la petrolera estadounidense Chevron «para seguir operando en Venezuela en condiciones violatorias a la Constitución», denunció Neirley Andrade, integrante del Buró Político del PCV.

«El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en un capataz de Chevron y del capital transnacional; mientras negocia y roba riqueza de la nación, condena a los trabajadores de la industria petrolera a condiciones deplorables», afirmó la dirigente.

Andrade explicó que esta situación también se extiende a las empresas básicas en las que «capitales trasnacionales obtienen grandes ganancias mientras miles de trabajadores se mantienen con ingresos miserables y se les impide incorporarse a sus puestos de trabajo, bajo la atroz figura de



los 'trabajadores desactivados'».

El PCV fustigó la línea de propaganda gubernamental que insiste en presentar las elecciones como una supuesta confrontación entre un polo socialista contra un polo capitalista en Venezuela.

«En Venezuela no hay socialismo y este Gobierno no solamente no es socialista, sino que además es cada vez más reacciona-

rio y le sirve a las cúpulas empresariales con su paquete neoliberal de ajuste, que condena a millones de familias venezolanas a una situación de precariedad nunca antes vista y que ha ocasionado la migración masiva de miles de venezolanos que tuvieron que salir de nuestro país para vender su fuerza de trabajo en mejores condiciones», afirmó Andrade. ■

## Cúpula del PSUV está fabricando escenarios de violencia

TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) expresó preocupación sobre el discurso que está promoviendo la cúpula del Gobierno-PSUV dirigido a fabricar un escenario de eventual violencia de cara a las elecciones presidenciales.

«Este discurso también va acompañado con prácticas dirigidas a sembrar desesperanza, temor, miedo en la población y por ende, no persigue otra cosa que promover la abstención», advirtió Yul Jabour, integrante del Buró Político.

«Estamos hablando de provocaciones, de detenciones arbitrarias, los cierres de

pequeños negocios, el hostigamiento contra activistas políticos, pero también de las matrices de opinión dirigidas a sembrar dudas sobre el desenlace del proceso electoral, acompañadas de descalificativos contra todos aquellos que adversamos la política antiobrera y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro», detalló.

Jabour descartó que estas maquinaciones sobre acciones violentas tengan un correlato en la ciudadanía: «El pueblo venezolano ha cifrado en el voto la posibilidad de salir de esta catástrofe a la que nos han llevado los dos polos corresponsables de la crítica situación en la que se encuen-

tra nuestro país».

El pasado 18 de julio, circuló un video en redes sociales en las que un grupo de policías rodeó la vivienda del dirigente social Régulo Reina en Temblador, estado Monagas. Vecinos y familiares se interpusieron para evitar su detención, pero finalmente fue aprehendido.

A través de un pronunciamiento público, el PCV reiteró su denuncia «de la puesta en marcha por parte de la cúpula corrupta del Gobierno-PSUV de un plan dirigido a intimidar y promover la abstención porque saben que no cuentan con el respaldo popular». ■

## Reforma del IGTf: «para la burguesía todo; para el pueblo nada»

TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó que el presidente Nicolás Maduro anunciara la reducción a 0% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en bolívares para los empresarios en Venezuela mientras que el resto de la ciudadanía que use divisas para adquirir cualquier tipo de producto deba seguir pagando el tributo tasado en 3%.

«Para la burguesía nacional todo; pero para el pueblo nada» afirmó Maribell Díaz, integrante del Buró Político del PCV durante una declaración de prensa.

Maduro anunció la reforma durante un nuevo encuentro con las cúpulas empre-



sariales del país «que recibieron la noticia con fuertes aplausos y sonrisas» pues se trataba de una de las principales demandas de la burguesía venezolana «que no ha du-

dado en cerrar filas con el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela por los numerosos favores recibidos», afirmó Díaz.

El Jefe de Estado mantuvo en su decreto presidencial el pago de 3% de impuesto para el uso de divisas en el resto de las transacciones que realizan los consumidores quienes se han visto obligados en los últimos años a respaldar sus ingresos en dólares ante la crisis inflacionaria.

«La señora que va al supermercado con el dólar, con tres dólares, con cinco dólares, esa sí paga impuesto; pero a Fedecámaras y a Consecomerio se les derogó y quedaron sin pagar un centavo a la nación», denunció la dirigente. ■

## SALUD OCUPACIONAL

### Recuperar el derecho de los trabajadores a un entorno laboral seguro y saludable

Douglas Gómez

Secretario de Salud y Trabajo de la CUTV

Dentro del acuerdo programático «para recuperar la dignidad de los trabajadores» que suscribió el candidato presidencial Enrique Márquez el sábado 13 de julio en el Teatro Cantaclaro, resaltan un par de puntos que recogen las expectativas de cambio político del movimiento de delegadas y delegados de prevención y demás activistas por la salud ocupacional; y permiten —en consecuencia— crear las condiciones para un reagrupamiento de fuerzas en su seno y reanimar sus luchas por el rescate del derecho a un entorno laboral seguro y saludable.

Me refiero concretamente al compromiso de Márquez a «restablecer la Constitución y el estado de derecho» y, en segundo lugar, a «avanzar hacia un sistema de seguridad social integral, universal, público y solidario».

En nuestra opinión, ambos compromisos se quedarían a mitad de camino, sin el concurso y participación protagónica, organizada y consciente de las y los trabajadores; tal y como ocurrió en estos 11 años bajo la gestión de Nicolás Maduro.

¿En qué se fundamentaría esa participación protagónica? En primer lugar, en la exigencia permanente y vigilante de la aplicación estricta de la *Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcy-mat)*, sobre todo en su contenido preventivo; así como de lo establecido en el artículo 87 de la Constitución: «Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados».

En segundo lugar, en la exigencia de la puesta en marcha definitiva del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en tanto que es uno de los componentes del Sistema de Seguridad Social Integral; cuyo objetivo es garantizar a las y los trabajadores las prestaciones de la seguridad social que le corresponden en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

A casi 20 años de haberse promulgado la reforma de la Lopcy-mat (instrumento que regula la creación y funcionamiento de este régimen prestacional), todavía no ha sido puesto en marcha; dejando en total estado de indefensión a las y los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional. Es decir, sin acceso (cobertura) a las prestaciones de la seguridad social, tanto dinerarias como las de atención médica, rehabilitación o reinserción laboral.

Revertir este lamentable cuadro y recuperar esos derechos constitucionales es tarea de un Gobierno verdaderamente democrático y popular; y ese carácter solamente se adquiere en la medida en que las y los trabajadores participen de manera protagónica en la dirección del Estado y la economía.

## Arrecia persecución y criminalización contra trabajadores



Pedro Eusse

Secretario General de la CUTV

A pocos días de las elecciones presidenciales, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gobierno de Nicolás Maduro arrecian sus actuaciones antidemocráticas contra trabajadores, dirigentes obreros, líderes sociales y activistas que adversan su política antiobrera y antipopular.

Efectivamente, entre los meses de junio y julio se han incrementado en Venezuela situaciones de despidos arbitrarios, persecución judicial y detenciones irregulares cometidas por un Gobierno que con métodos antidemocráticos se aferra al poder para beneficio de las élites empresariales y las mafias de la burocracia estatal.

Iniciando el mes de julio, autoridades de la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, cometieron una grave vulneración a la libertad sindical, consagrada en la ley y en la Constitución, así como en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando suspendieron el sueldo y jubilaron de manera forzada y fraudulenta a Yenis Silva y a Tomas Reyes, Presidenta y Secretario General, respectivamente, del Sindicato Único de Obreros Municipales Gubernamentales e Institutos Autónomos del Municipio Libertador del Distrito Capital (Suomgia).

Este tipo de prácticas —que constituyen un despido simulado e ilegal, violentando el fuero sindical— son implementadas en diferentes instituciones y empresas del Estado con la finalidad de expulsar de las entidades de trabajo a dirigentes sindicales y delegados de prevención que no se subordinan a la patronal. Es el caso de Silva y Reyes, quienes confrontan los numerosos abusos contra el personal obrero que se cometen en la Alcaldía de Caracas. Desde su elección como directivos sindicales, a ambos les ha tocado enfrentar provocaciones y amenazas por parte de la patronal y mercenarios a su servicio.

Pero la nueva arremetida no ha amilanado a la combativa junta directiva de Suomgia que realiza todas las acciones necesarias para revertir la ilegalidad cometida, no sólo contra los directivos sindicales jubilados forzosamente, sino también contra las y los trabajadores a quienes pretenden imponerle una absoluta indefensión laboral, al golpear a los líderes sindicales electos legítimamente.

Por otra parte, en la empresa transnacional chilena Masisa, una manufacturera de madera establecida entre los estados Bolívar y Anzoátegui, el trabajador Jean Mendoza, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Empresas Manufactureras de la Madera y sus Similares, es víctima de un montaje judicial.

La patronal —con la complacencia de instancias del poder judicial— pretende criminalizarlo con el uso de la denominada ley «contra el odio». El supuesto «delito» de Mendoza no es otro que asumir acciones en defensa de los derechos laborales.

Todo se originó entre los años 2018 y 2020, cuando Mendoza participó en una serie de luchas por cumplimiento de compromisos de la patronal en materia salarial y por el reenganche de numerosos trabajadores que fueron despedidos de manera ilegal de esta empresa. En represalia y para sofocar las necesarias y legítimas acciones obreras que se desarrollaban, Masisa activó un proceso judicial contra Mendoza, resultando en su detención durante 48 horas.

El trabajador maderero salió en libertad, pero con medidas cautelares restrictivas. Posteriormente, fue electo delegado de prevención y, más recientemente, Secretario General del sindicato. Sin embargo, la patronal pretende desconocer su democrática designación y a inicios de julio reabrió el proceso judicial en su contra, solicitando que sea privado de libertad.

Estamos en presencia de un nuevo caso de criminalización de la lucha laboral y sindical (uno de tantos). Ahora en una empresa privada, pero con la anuencia de instancias del Estado venezolano. Ante ello, se ha levantado una campaña de solidaridad nacional e internacional para impedir que el líder sindical de Masisa sea llevado nuevamente a la cárcel y se deje sin efecto el irregular proceso penal que se le sigue.

Desde el sindicalismo clasista expresado en la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct), llamamos a fortalecer la lucha unitaria —con una mayor solidaridad nacional e internacional—, hasta derrotar esas prácticas de terror patronal y estatal contra la clase obrera venezolana.

Es necesario recordar que —hasta la fecha— el dirigente sindical Daniel Romero continúa privado de libertad por su activa participación en una importante lucha de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), a mediados del año pasado. Esa causa injusta la comparte con el directivo sindical Leonardo Azócar, quien —a diferencia de Romero— recibió una medida de juicio en libertad.

La XVI Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela, en su tercera fase, efectuada el pasado 22 de Junio, aprobó una resolución en la que se exige otorgar la misma medida a Daniel Romero y se aboga por el fin de la criminalización de la lucha sindical y popular; reclamo que fue incorporado por las y los comunistas al compromiso programático firmado con el candidato presidencial Enrique Márquez.

# Juan Assange fue liberado: una victoria del derecho a la información

**PAUL DOBSON.-** Movimientos populares antiimperialistas y medios de comunicación de todo el mundo celebraron la liberación del periodista australiano Julian Assange el pasado junio, cuando su equipo legal llegó a un acuerdo con la fiscalía estadounidense para poner fin a su bárbara detención en cárceles británicas.

El fundador del sitio web Wikileaks enfrentaba una posible condena a cadena perpetua en Estados Unidos por supuesto delito de «espionaje», luego de que entre 2010 y 2011 revelara información clasificada que confirmó las acciones ilegales y grotescas del imperialismo estadounidense en las guerras de Irak y Afganistán, entre otras.

Una de las revelaciones más impactantes ocurrió en abril de 2010, cuando Wikileaks publicó un video en el que se ve a un helicóptero estadounidense disparar y matar a dos periodistas y a varios civiles iraquíes en 2007.

El activista australiano buscó refugio en la embajada de Ecuador en Londres en 2012, donde permaneció hasta 2019, cuando el nuevo gobierno en Quito anuló su asilo político. Por ende, fue detenido por la policía inglesa y enviado a un cárcel de alta seguridad mientras Londres procesaba su extradición.

Este junio, después de cinco años ilegalmente detenido en Reino Unido —tiempo que impactó negativamente en su salud física y, sobretodo, mental—, se declaró culpable de los cargos de espionaje a cambio de una sentencia de tiempo ya servido, abriendo camino al traslado a su nativa Australia y —por fin— su libertad.

El júbilo por su liberación ha sido global. Durante más de una década, su causa se convirtió en una bandera de lucha de un amplio espectro de movimientos, organizaciones y partidos que defienden la libertad de expresión y el acceso oportuno a la información como derechos inalienables.



## ¿POR QUÉ AHORA?

Mientras algunos señalan que la decisión de Joe Biden de liberar a Assange responde realmente a una maniobra electoral dada la baja popularidad del presidente que aspira a su reelección, no se puede subestimar el impacto masivo de la campaña mundial por la liberación de este activista que se ha convertido en un ícono.

Con cada acción de protesta y de activismo en el ecosistema digital quedaba expuesto el fondo del asunto: el poder del gran capital —a través de sus títeres políticos— ejecuta acciones al margen de la ley y cuando alguien trata de revelarlas, usa todas las herramientas bajo su control —incluyendo presiones jurídicas, diplomáticas y económicas— para que la ciudadanía no se entere.

Sin embargo, como marxistas debemos comprender que este tipo de batallas abierta-

mente desiguales no se desarrollan de manera aislada, ni mucho menos son parte de una telenovela o cuento romántico de Hollywood, sino que son expresión de la lucha de clases y, por tanto, los poderosos no perseguirán otro fin que apagar la potencia revolucionaria de los oprimidos.

El caso de Assange también ocurre en un tiempo en el que las herramientas para controlar y cegar a los pueblos están cambiando vertiginosamente y, actualmente, asignan un mayor peso al «cuarto poder» (los medios de comunicación) y a la manipulación con fines electoreros.

En este contexto, el periodista australiano trascendió y se convirtió en una causa, un símbolo de lucha. Asimismo, el grito «Free Assange» se convirtió en una invitación para desenmascarar al imperialismo asesino, y sembrar conciencia revolucionaria. ■

## Falleció el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam

**TP/ VIETNAM PLUS.-** El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, falleció el pasado 19 de julio a los 80 años de edad.

Antes de convertirse en un dirigente de alto nivel, Nguyen Phu Trong pasó muchos años trabajando en campos relacionados con la ideología y la cultura, como editor e investigador en la Revista Comunista entre 1991 y 1996. Fue nombrado presidente del Consejo Teórico Central del PCV entre 2001

y 2007. Además, fue Secretario del Comité Ejecutivo del partido en Hanoi. De 2006 a 2011 fue presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam. Ese último año es electo por primera vez Secretario General del PCV.

Bajo su liderazgo, Vietnam alcanzó los mayores logros en el campo económico, con un crecimiento estable del Producto

Interno Bruto (PIB). El líder implementó hábilmente la «diplomacia de bambú», cuando Vietnam necesitaba manejar las relaciones con sus socios económicos más importantes, China y Estados Unidos, al tiempo que consolidó relaciones con países como India y Rusia.

El Buró Político del PCV anunció que el actual presidente del país asiático, To Lam, asumirá la dirección del trabajo de los órganos rectores del partido. ■

## Organizaciones sindicales peruanas protestaron contra Gobierno de Boluarte

**TRIBUNA POPULAR.-** La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto con la Coordinadora Nacional de Jubilados del Perú, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Plataforma por la Democracia, la Asamblea Nacional de los Pueblos y la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas, entre otras organizaciones, convocaron un paro nacio-

nal cívico y popular el pasado 19 de julio.

El Secretario General de la CGTP, Gerónimo López, denunció que el Gobierno de Dina Boluarte «sirve a grupos de poder» y «actúa de espaldas al pueblo».

La acción de protesta tuvo entre sus exigencias el incremento de salarios y pensiones ante el aumento del costo de vida.

Por su parte, el Secretario adjunto de la

central, Gustavo Minaya, al explicar los objetivos dijo: «Lo que esperamos es que ella (Boluarte) de un paso al costado, que le permita a los peruanos y peruanas tener la oportunidad de un nuevo proyecto democrático, de una nueva oportunidad para darle a los peruanos y peruanas derechos básicos, derecho a un ingreso digno, derecho a atender las necesidades básicas de nuestros hijos». ■

# Margot Benacerraf más allá de los géneros cinematográficos

**Manuel Azuaje Reverón**

Profesor de Filosofía, editor y crítico de cine

La larga vida de una cineasta venezolana es huella testimonial de un profundo compromiso con el cine venezolano y una fuente inagotable para nuevas aproximaciones. En mayo pasado falleció Margot Benacerraf; hija un judío de Marruecos y de una integrante de la aristocracia sefardí española. El padre había llegado inicialmente a Cumaná y posteriormente se instaló con su familia en Caracas, donde nació la cineasta.

La tozuda personalidad de la joven Margot se expresa tempranamente en su decisión de continuar los estudios de bachillerato. Su interés por la literatura y el teatro le conducen a ganar un concurso de ensayos sobre el ideal panamericano del Libertador. Unos años después, cursando estudios universitarios de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Venezuela y de Lengua y Literatura en el Instituto Pedagógico, ganó un concurso de escritura teatral promovido por la Universidad de Columbia.

Benacerraf se rodeó de un entorno cultural de gran peso, que incluía a figuras como Mariano Picón Salas, Miguel Otero Silva, Juan David García Bacca y Alberto Paz y Mateos. A nivel internacional también contó con la amistad de Pablo Picasso, Erwin Piscator, Luis Buñuel, entre otros artistas. Su participación en esos entornos respondía al mérito propio de su obra, su personalidad y sus ideas.

Expresión de esto es el impacto del estreno de *Reverón* (1952) en Francia. Al ver la película, el propio Picasso le pidió a Benacerraf que rodara un film sobre su vida. *Reverón* sería seleccionado por la Asociación Francesa de Crítica de Arte y Televisión para formar parte del programa de inauguración de la sala de arte y ensayo Etoile, en los Campos Elíseos.

Tras ese primer éxito, la cineasta regresa a Venezuela y se involucra en varios proyectos cinematográficos, tales como una adaptación de la novela de Miguel Otero Silva *Casas Muertas*. En ese recorrido presenta su segunda película, obra trascendental de la filmografía venezolana y latinoamericana: *Araya* (1959). La película recibe el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes y lo comparte con la cinta de Alain Resnais, *Hiroshima Mon Amor*. Sobre el filme, Luis Buñuel diría que después de *iQué Viva México!* de Sergei Eisenstein, jamás se habían visto imágenes tan bellas como las de *Araya*.

Benacerraf no filmaría otra película, pero a partir de ahí se dedicaría de lleno al fortalecimiento del cine venezolano, a través de la fundación de la Cinemateca Nacional y otros proyectos posteriores.

## ARAYA MÁS ALLÁ DE LOS GÉNEROS

En *Araya* uno de los primeros temas a esculpir es la pregunta ¿a qué género pertenece? A fin de cuentas, nosotros estamos atravesados por el género, que nos condiciona como espectadores, y el carácter indescifrable de este filme hace que sea complejo para el público.



A la vez, es justo reconocer que es una película que trasciende los límites de esta cuestión. No es un documental en el sentido clásico, pero tampoco es una película de ficción claramente reconocible para nosotros, con la estructura clásica del relato.

Dice Benacerraf al respecto: «la palabra documental implica una mirada distinta, una técnica distinta. Yo improvisé muy poco en *Araya*, cada vez que hay algo que me interesaba lo introducía en un eje ya muy elaborado en el que cada toma estaba especificada, cada escena estaba explicada, todo estaba construido rigurosamente. Es decir que había un trabajo muy coherente de una película de verdad de ficción y no como esperar a que pasaran cosas y yo con la cámara filmaba y luego lo montaba en una sala de montaje y obligaba a las imágenes a decir lo que uno quiere decir».

Cuando Ambretta Marrosu escribe sobre los orígenes del documental en América Latina no la coloca entre las precursoras. Algunos críticos indican que esto se debe a que la estructura del documental latinoamericano estaba asociada al documental marxista, que invita a la acción y a la conciencia de clase y eso no está claramente a expuesto ni en *Reverón* ni en *Araya*. En este sentido, una de las novedades a reconocer en la película es su ruptura con los límites de los géneros cinematográficos, abriendo posibilidades para nuevas generaciones.

Algunos de los aspectos sobre los que invitamos a reflexionar tras ver esta cinta, son el carácter atemporal y repetitivo del trabajo, posicionándose en torno a ciertas discusiones sobre la inserción de América Latina en el capitalismo; una estética del cuerpo masculino y el trabajo; la descripción circular del tiempo a partir de la repetición; el discurso poético a través de la voz en off; y la crítica temprana al desarrollo y el progreso, representada en la contraposición entre el trabajo y las máquinas.

*Araya* tardó 18 años en proyectarse en Venezuela, generando una relación compleja con el llamado Nuevo Cine de los años 70, que aún está por pensarse. Reiteramos el llamado a mirar nuestro cine, pensar nuestro cine.

## ¡A HACKEAR EL SISTEMA!

### Colapsa el sistema hegemónico: la actualización que hizo tambalear a Windows

**Junior Sumosa**

Abogado, especialista en ciberseguridad

«¡Feliz día mundial del pantallazo azul!». Este mensaje copó las redes sociales el pasado 19 de julio, cuando CrowdStrike, la plataforma de ciberseguridad con la que trabaja Microsoft Windows, ejecutó una actualización fallida y dejó inoperativas a millones de máquinas que usan el popular sistema operativo en todo el mundo.

Los memes no se hicieron esperar: la comunidad de software libre y de usuarios del GNU/Linux colmaron el suceso del día con cientos de imágenes y chistes para ridiculizar al sistema operativo privativo que quedó atrapado en un bucle de reinicio por varias horas.

El «apagón azul» de Microsoft Windows reabrió el debate sobre la importancia de desarrollar soluciones de software bajo licencias libres y seguras.

No se puede hablar de soberanía tecnológica nacional mientras se usa software de licencia privativa. Además, se deben revisar algunas prácticas de «asesores tecnológicos» que —so pretexto de reducir gastos de inversión en infraestructura tecnológica— contratan a terceros para virtualizar servicios y con ello delegan funciones críticas en manos de empresas que pudieran vulnerar información estratégica por razones técnicas o incluso políticas.

Volviendo a lo ocurrido tras la actualización fallida del software de ciberseguridad y monitoreo desarrollado por la empresa CrowdStrike, se reportaron fallas en sistemas de check-in en aeropuertos, en cajeros automáticos de entidades bancarias, así como en computadoras de oficinas comerciales y financieras, centros de trabajo, universidades y particulares.

Dejando las bromas a un lado, esta falla sin precedentes en la historia reciente de la ciberseguridad pone de relieve la necesidad de los pueblos de tener control pleno de sus sistemas de información.

Garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas pasa por adoptar metodologías de desarrollo de software seguros y soberanos. Así como también la implementación de sistemas operativos estables y robustos como lo son los sistemas operativos basado en tecnologías libres.

También este episodio resalta el valor de las comunidades de activistas por el software libre que trabajan sistemáticamente para depurar y mitigar errores en las aplicaciones o sistemas libres. Con una visión de desarrollo colaborativo, las aplicaciones y sistemas libres tienen detrás de sí laboriosos procesos en los que las versiones «beta» son minuciosamente revisadas para localizar las vulnerabilidades antes de ser pasadas a producción y finalmente presentadas a los usuarios.

Un chiste final para los defensores de los sistemas privativos: ¿Saben por qué la NASA no usa Windows? ¡Porque en el espacio no se pueden abrir ventanas! (inserte risas aquí).

# ALERTA: Continúa el plan de ataque contra el Partido Comunista de Venezuela

**COMUNICADO.-** A pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales, en un contexto marcado por el abuso de poder, el ventajismo, las amenazas, provocaciones, maniobras antidemocráticas de todo tipo y la cada vez más profunda deriva autoritaria del Gobierno de Nicolás Maduro, así como el secuestro de la tarjeta electoral del Partido Comunista de Venezuela (PCV), se ha activado un nuevo eslabón en el plan de ataque orquestado desde la cúpula del Gobierno-PSUV contra el PCV y su política.

Informamos a la opinión pública nacional y al Movimiento Comunista Internacional que dos miembros del Comité Central del PCV se han unido al plan de liquidación que ejecuta la cúpula del Gobierno-PSUV para despojar a la clase trabajadora venezolana de su histórico referente de lucha.

El pasado martes 16 de julio, Carolus Wimmer y Úrsula Aguilera, junto a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de otras organizaciones controladas por la cúpula gubernamental, dieron una rueda de prensa para desconocer los acuerdos de la XVI Conferencia Nacional del PCV y cerrar filas con la política antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro Moros.

Tal y como es del conocimiento de la militancia del PCV, en mayo del presente año, Carolus Wimmer y Úrsula Aguilera fueron remitidos a la Comisión Nacional de Disciplina y Control de Cuadros del Comité Central, por desconocer decisiones de la legítima dirección nacional de nuestro partido y organizar acciones con reconocidos operadores políticos del PSUV para socavar la imagen del PCV a nivel internacional.

Carolus Wimmer y Úrsula Aguilera se marginaron de la vida partidaria al abandonar los espacios de debate y construcción colectiva, específicamente las sesiones de trabajo de la XVI Conferencia Nacional del PCV que —tras celebrar tres fases que se extendieron por ocho meses— resolvió apoyar la candidatura del ingeniero Enrique Márquez a la Presidencia de la República.



Wilmer (izq.) y Aguilera (der.) junto a militantes del PSUV y de Tupamaro

Durante este tiempo, los organismos de dirección de nuestro partido, como lo son el Comité Regional del PCV en Caracas, el Comité Central, el Buró Político o la propia Conferencia Nacional, jamás recibieron algún tipo de opinión o valoración crítica por parte de Carolus Wimmer o Úrsula Aguilera. Su conducta contrasta con el profundo y franco debate dado en las filas de nuestra organización que finalmente se trazó como un objetivo de primer orden impulsar un proceso de reagrupamiento de las fuerzas auténticamente democráticas para recuperar la plena vigencia de la Constitución y el estado de derecho en el país, a la vez que enfrentamos el plan de aislamiento político-electoral que intentó imponernos la cúpula reaccionaria del Gobierno-PSUV.

La rueda de prensa dada por Wimmer y Aguilera repite el esquema que desde hace más de un año ejecuta el PSUV para hacer creer a la opinión pública que en el seno del PCV hay aceptación a su paquetazo neoliberal: El uso de espacios y de medios de comunicación bajo control gubernamental; la descarada presencia de militantes del PSUV y de otras organizaciones políticas intervenidas judicialmente que se hacen pasar burdamente por militantes comunistas y, lo más peligroso del caso, la defensa de un régimen que ha pactado con las cúpulas empresariales

mientras destruye las condiciones de vida de la familia trabajadora.

Todos los hechos referidos serán considerados por la Comisión Nacional de Disciplina y Control de Cuadros del Comité Central del PCV, para determinar si los mismos configuran —con base en la práctica política marxista-leninista y lo establecido en los Estatutos del PCV— un hecho de traición a los valores y principios que rigen la vida orgánica de quienes militamos en el PCV, al conspirar y colaborar abiertamente con aquellos que ejecutan un plan para liquidar al histórico Partido Comunista de Venezuela.

Las declaraciones de Carolus Wimmer y Úrsula Aguilera, contradicen en su esencia la línea política aprobada por el XVI Congreso Nacional del PCV (Nov. 2022), al calificar la catástrofe que sufre el pueblo venezolano como un proceso «socialista», cuando la realidad es que la cúpula que dirige Nicolás Maduro persigue, secuestra, encarcela y hasta tortura trabajadores.

A pesar de esta nueva modalidad que adopta el plan de agresión, las y los militantes del PCV mantenemos en alto y con orgullo nuestras banderas de lucha. Ratificamos nuestro compromiso con los intereses de la clase trabajadora venezolana y las amplias mayorías populares, así como con la defensa de la soberanía nacional frente a todas las formas de dominación imperialista.

Confiamos que este oscuro trance que atraviesa el país será superado no sólo con la masiva participación del pueblo en las elecciones del 28 de julio, sino con la lucha organizada por la recuperación de los derechos políticos, sociales y laborales que este nefasto Gobierno nos ha arrebatado.

En los próximos días, el Comité Central del PCV sesionará para tomar las medidas disciplinarias correspondientes.

**¡Seguimos en pie: sumando fuerzas y organizando luchas!  
¡Al PCV no lo destruye nadie!**

## Movimiento sindical clasista denuncia ante la FSM maniobra para «lavarle la cara» al gobierno de Maduro

**PRENSA CUTV.-** La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) envió un comunicado a la Federación Sindical Mundial (FSM), sus organizaciones afiliadas y demás expresiones del sindicalismo clasista en el mundo, para denunciar el papel que cumple la llamada Plataforma de la Clase Obrera Antimperialista (PCOA), a propósito de una invitación que cursara ese instrumento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a un evento virtual —a pocos días de las elecciones presidenciales—, con la finalidad de intentar lavarle la cara al antiobrero gobierno venezolano y auspiciar apoyos de sindicalistas a las pretensión de reelección de Nicolás Maduro.

En el comunicado, la CUTV explica que el PCOA fue creada por la cúpula del Gobierno-PSUV para «promover la conciliación de clases y la subordinación ante el capital».

Para la CUTV la convocatoria de este nuevo evento a pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales es motivo de alerta pues «aus-

picia el respaldo y la solidaridad de representantes del sindicalismo internacional, con las intenciones de reelección del actual Presidente Nicolás Maduro, quien ha desarrollado una abierta política contraria a los intereses de la clase trabajadora venezolana, destruyendo el salario y las convenciones colectivas; persiguiendo y reprimiendo al sindicalismo no patronal y, en general, coartando las libertades democráticas conquistadas por el pueblo trabajador venezolano».

En el texto se detalló que las elecciones presidenciales en Venezuela son polarizadas por dos fuerzas «que expresan los intereses y las ambiciones hegemónicas de los capitales nacionales y transnacionales».

En consecuencia —expone el comunicado—, «el movimiento obrero y sindical clasista venezolano, desde una posición de independencia de clase, no respalda a ninguna de las dos opciones hegemónicas burguesas, pero sí considera indispensable la masiva participación

en las urnas electorales de los trabajadores y el pueblo en general en procura de un cambio político, que abra la posibilidad de restablecer los derechos laborales, sociales y políticos de nuestra clase trabajadora».

Los cutevistas reafirmaron la importancia de que el movimiento sindical clasista y demás fuerzas antimperialistas y democráticas del mundo rechacen «la práctica imperialista de imponer sanciones a los pueblos, incluyendo a Venezuela»; pero también instaron a la comprensión y solidaridad con los trabajadores y el sindicalismo clasista venezolano que sufre «las tropelías neoliberales y autoritarias de una élite corrupta que se hace llamar ‘socialista’ y ‘revolucionaria’, mientras profundiza las desigualdades sociales y cercena las libertades políticas y sindicales de forma descarada» e incluso «lleva a la cárcel a dirigentes obreros que luchan por el respeto a la Constitución, a la legislación laboral y a las convenciones colectivas de trabajo». ■